

ESPAÑA ES POBRE

LAS palabras del vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos, señor Fuentes Quintana, pronunciadas inesperadamente por televisión el viernes de la semana pasada, han creado un relativo clima de esperanza y optimismo, a pesar de su carácter dramático. O quizá por ese carácter, que representa una sinceridad no habitual. La figura del señor Fuentes Quintana ofrece desde hace años confianza en los medios de la teoría económica del país: muchos economistas, muchos políticos, han pasado por sus clases, en las que se ha expresado siempre con claridad y con un sentido común —virtud que él invocaba en sus palabras como clave de la economía, junto con la experiencia— que, valga la paradoja, es muy poco común en un país que ha soportado tantas utopías, tantos énfasis y hasta tantas mendacidades —a partir de la locura de la autarquía— y que ha oscurecido deliberadamente el cielo de la economía hasta llegar a darle un carácter esotérico —“mago de las finanzas” o “milagro económico” son algunas de las más tontas expresiones de nuestro tiempo— y casi sacerdotal, en el sentido con el que los sacerdotes del antiguo Egipto se reservaban para sí la sabiduría, la técnica y el lenguaje para dominar al pueblo. Flanqueado por una figura también frecuentemente respetada por su honestidad y su claridad de juicio, como la del nuevo ministro de Hacienda, señor Fernández Ordóñez, ofrece la cara del Gobierno para intentar resolver aquello que todos estamos conformes con que es el tema más agudo del momento: la economía del país. Una economía deteriorada y dilapidada. España, ha venido a decir el señor Fuentes Quintana, es un país pobre. Un país cuyo coste de vida se cifrará este año en un 30 por 100; con un 5 por 100 de parados sobre el censo de la población trabajadora y con un déficit de mercancías y servicios que se va a acercar en este año —si no los supera— a los 5.000 millones de dólares.

EL programa que apenas ha esbozado el señor Fuentes Quintana —que sólo podrá ser enteramente comprendido cuando se publiquen las verdaderas medidas económicas que se están adoptando, lo cual no ha sucedido a la hora de cerrar este número— no es muy distinto del que han planteado o planeado los economistas de fuera del Gobierno, lo cual también se añade a la confianza de principio. Con la diferencia de que el señor Fuentes Quintana tiene la obligación de ponerlo en funcionamiento —con el presidente del Gobierno, señor Suárez— y los otros economistas representados en las Cortes o en los partidos políticos tendrán la obligación de criticar y estimular. Naturalmente que de esta coincidencia excluimos los programas maximalistas —colectivizaciones, nacionalizaciones, socialismo de pleno funcionamiento—, porque son difícilmente implantables en la España actual.

PLANTEA el señor Fuentes Quintana la necesidad de un apretón de cinturón, a la manera clásica, apelando a la “colaboración responsable de todos los ciudadanos”, al “esfuerzo generoso” de todos; matizado con el compromiso formal de que “dentro de ese esfuerzo colectivo los intereses de las clases modestas serán especialmente protegidos”, matiz que también es clásico en la literatura económica de todos los poderes. En el breve examen de las causas de nuestro deterioro económico, el señor Fuentes Quintana no incluye la mención de que tal deterioro no se debe a las clases llamadas modestas; quizá prefiera obviarlo, porque no se trata de la busca de responsabilidades históricas, sino de atajar al futuro, pero sí conviene señalar que hay un factor existente de despilfarro, de co-

rrupción, de ocultación fiscal y de suntuosidad que deberán desaparecer antes de que nadie esté dispuesto a utilizar su propio cinturón para salvar a la totalidad. Es decir, que la confianza que es necesaria para que cualquier programa económico prospere en este país sólo se establecerá con una cierta ejemplaridad. La corrupción, a la que se ha dado el nombre de Matesa (como en lejanos tiempos tomó el de “estraperlo”), pero que tiene otros muchos nombres sociales y personales y que alcanza a muchas escalas de la dirección del país, no se ha agotado con el sistema político fenecido; las dólisis siguen saliendo al extranjero por muchos medios —y no es el más importante el de los maletines— de carácter fraudulento; la fiscalidad está hecha ya contando con el fraude, y para nadie es un secreto las dobles, triples o múltiples contabilidades y la vergüenza de las listas de contribuyentes. El despilfarro corresponde a las clases acaudaladas, y la carestía del Estado, cuyos presupuestos generales son un ejemplo de consumismo oficial y de inflación, se implantó durante el régimen de Franco como una parte connatural de la autocracia, que necesita esa elevación estatal para mejor dominar. Cuando aparezcan las medidas concretas, se verá si estos factores están en vías de desaparición o si las aberraciones endémicas superan todas las posibilidades del Gobierno, que tiene tantos compromisos para su subsistencia, para dominarlas. La reforma administrativa —o reestructuración, o como se le quiera llamar— nos ha decepcionado en el sentido de que no acaba con la suntuosidad del Estado. Una Administración incorruptible deberá plantearse a partir de ahora, y una policía económica es imprescindible. La enumeración del desgaste económico que ha hecho el señor Fuentes Quintana (“... queríamos más y mejor educación para nuestros hijos, queríamos más y mejor asistencia sanitaria, queríamos unas ciudades y unos pueblos de rostro humano...”) podría hacer descansar sobre unas aspiraciones justas la base del problema. En realidad, seguimos queriendo todo ello, y tenemos derecho a exigirlo.

UN punto clave en la enumeración de principios del vicepresidente segundo es ésta: “... una creencia firme en las ventajas de la libertad económica y la economía de mercado y en la energía creadora de la libertad, buscando, incluso, una eliminación de los intervencionismos ineficientes y estérilmente centralizadores”. Es una enunciación breve del sistema del liberalismo económico, que ya había prometido o anunciado el presidente del Gobierno, señor Suárez, con su Gobierno anterior. Dicho de otra forma, es un anuncio de neocapitalismo. No ha añadido hasta ahora matices, correcciones o explicaciones que permitan explicarlo de otro modo, o con más detalle. La crítica a este liberalismo económico es, por lo tanto, clásica también: supone la “ley del más fuerte”, está basado, como ya se dijo en el siglo XIX, en la “lucha por la vida”. Esto hace que las clases sociales, las capas de riqueza, sean teóricamente perforables desde abajo, pero, en la práctica, se mantiene dentro del uso de los medios de conservación y ascenso de los ya establecidos, de los que tienen el dominio de los instrumentos de producción, el acceso a la cultura, a la dirección. Las intervenciones estatales fueron utilizadas posteriormente para corregir esa situación: desde la forma relativamente suave en que las aplicó Roosevelt con el “new deal” —en un momento dramático en que el capitalismo se moría de sí mismo en el país de más fuerza capitalista del mundo—, hasta las maneras drásticas en que fueron aplicadas en los países de régimen comunista o nazi-fascista. Puede ahora decirse que estas aplicaciones resultaron de una considerable eficacia de choque: la Alemania

nazi salió de la postración del Tratado de Versalles, como la URSS o China salieron del feudalismo. No han hecho, en cambio, la felicidad de sus súbditos.

EN cuanto a España, materia de la corrección del señor Fuentes Quintana, se sabe muy bien a dónde ha llevado el intervencionismo: desde los planes locos y fanáticos de la autarquía hasta la financiación de industrias improductivas o dolosas para la economía nacional, desde la protección a grupos amigos o triunfantes hasta la corrupción general. Aquí están, en palabras justas del señor Fuentes Quintana, la "crisis continua en terrenos como la educación o sanidad, nuestra dotación de infraestructura social", que "se nos ha quedado pequeña, y hemos de soportar un medio rural empobrecido y unas ciudades víctimas de la especulación y de una urbanización defectuosa". Este neoliberalismo económico que se nos propone, con todos sus defectos iniciales o teóricos, viene a resultar un alivio tras el mal uso de "los intervencionismos ineficientes y estérilmente centralizadores", sobre todo si se prometen "las reformas necesarias" y las "intervenciones adecuadas para cortar aberraciones del mercado, tales como se expresan en esa lacra improductiva que es la especulación del suelo".

LA dificultad va a estar en coonestar este neoliberalismo con la protección a las clases modestas, que es el compromiso formal del vicepresidente segundo, y de todo el Gobierno. La palabra "protección" suena todavía a paternalismo y a una existencia de dos niveles diferenciados: un nivel de poder económico real y un nivel de clases explotadas. Que el Gobierno proteja a éstas contra aquéllas no parece suficiente. Habría que ir bastante más allá. Aunque, por el momento, no parezca demasiado posible.

PARA buscar este entendimiento, el señor Fuentes Quintana anuncia ya que su programa económico no va a ser impuesto, sino negociado: "Son problemas que afectan al interés nacional y que exigen para su solución la colaboración responsable de todos los grupos y partidos". Quizá nos encontramos ante una situación parecida a la de Italia, donde el Gobierno monocolor de la Democracia Cristiana —que equivaldría en muchas cosas al "centro" que aquí representa el señor Suárez y su nuevo partido— ha consultado su programa económico a los partidos políticos del llamado "arco constitucional", antes de presentarlo a la Cámara, con objeto de tener por lo menos la abstención en las votaciones de confianza. Aquí, ese mecanismo parlamentario no juega con la misma legalidad: la condición del Gobierno de no responsable ante las Cámaras y sus facilidades mayores para gobernar por decretos-leyes, le darían una mayor impunidad en sus medidas económicas. No parece que esté en la naturaleza y en la sinceridad del señor Fuentes Quintana el buscarse una coartada parlamentaria con sus negociaciones o consultas previas, ni tampoco buscar una forma de acallar a las fuerzas sociales o a los partidos políticos en el ejercicio de su crítica. Es decir, debería tratarse de una negociación verdadera, en la que fueran aceptados los puntos de vista de las fuerzas sociales —trabajadores y empresarios— e incluidos en el programa de economía. Partidos y centrales sindicales tomarán suficiente cuidado en no aceptar principios que pudieran después no ser tolerados por sus bases. El malestar social es grave, es profundo: la inflación y el desempleo continúan percutiendo sobre las clases llamadas en este caso modestas, y se sabe lo que va a pasar en el mes de octubre, en lo que interna-

cionalmente se llama ya "otoño caliente", que tuvo en España, el año pasado, tan dramáticas representaciones en todo el escenario laboral nacional. Los partidos o grupos que se comprometan en las negociaciones con el Gobierno no podrán hacerlo tampoco por tácticas o estrategias políticas o parlamentarias: deberán responder con sinceridad a la sinceridad que en principio ofrece el señor Fuentes Quintana, sin alucinarse por el cumplimiento de su papel de oposición, pero sin olvidar que representan unas clases sociales que —insistimos una vez más— no han tenido arte ni parte en la deterioración de la economía, sino que han sido siempre sus víctimas. Y tenemos que incluir en esas clases sociales no sólo a lo que tradicionalmente se llama proletariado, que va recuperando —desgraciadamente— una forma antigua de desesperación que parecía haberse perdido con el disfraz de los "nuevos tiempos", sino también a la pequeña y mediana empresa, que tienen sus vidas amenazadas en esta crisis económica.

POCOS Gobiernos habrán tenido en España el margen de confianza —merecida o no, es otra cuestión— que tiene el del señor Suárez: pocos responsables generales de la economía nacional habrán tenido la que tiene hoy el señor Fuentes Quintana, por su historial y por la claridad con que ha hablado a los españoles. Dentro, naturalmente, de las reservas antes enunciadas. Venimos a aceptar, con un carácter provisional —creyendo, muchos, que la reforma habrá de ser en el futuro mucho más profunda y mucho más drástica, pero aceptando la necesidad política del presente—, lo enunciado, incluso el principio doloroso de la devaluación de la moneda; venimos a aceptar que no hay milagros, sino esfuerzo de mucho tiempo. Este margen de confianza que queda abierto obliga mucho más al Gobierno del señor Suárez. Y escribimos "al Gobierno del señor Suárez" porque está claro que, aunque haya sido avanzada con tanta ostensible generosidad su figura para exponer los principios económicos, el propio señor Suárez no podrá nunca hurtarse a su propia responsabilidad por el mecanismo simple de retirar al señor Fuentes Quintana del Gobierno —de "su" Gobierno— el día en que estas medidas no se completasen o no llegasen a un fin por lo menos aceptable.

ES un momento en que todo se puede hacer. A partir de la puesta en marcha de unos mecanismos reales que demuestren que no se movilizan solamente instrumentos psicológicos o demagógicos para convertir, una vez más, al pueblo en víctima. El Gobierno del señor Suárez representa unos intereses económicos propios de la derecha, que van desde los grandes intereses hasta la burguesía estable que quiere correr poco riesgo de desclasarse. Todo ese conjunto de intereses no podrá prevalecer si la gran masa social, si el conjunto de asalariados y de mano de obra de todas clases, si los artesanos y los pequeños empresarios no están algo más que protegidos: recompensados en sus justas proporciones, que sin duda están más allá de lo que puede dar una democracia burguesa.

ESPEREMOS ahora las medidas para poder realizar de ellas un examen más detallado y más conforme a la técnica económica. Aunque el señor Fuentes Quintana ha acertado una vez más al decir que "las soluciones de los problemas económicos de un país no son económicas, sino políticas", también podría invertirse la frase: "las soluciones de los problemas políticos de un país son siempre económicas". ■